

## En el umbral de la violencia: evitar el estallido de la crisis en Zimbabwe.

*Patricia García Amado. Investigadora de la Escola de Cultura de Pau*

*Un mes después de la celebración de elecciones generales en Zimbabwe la Comisión Electoral (ZEC) continúa sin dar a conocer el resultado de los comicios presidenciales. Esta estrategia ha sido vista por el principal partido opositor MDC (Movimiento Democrático para el Cambio), que reclama la victoria, como una estratagema más del partido de Robert Mugabe, ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), para retener el poder y consagrar así el fraude que fue incapaz de perpetrar durante la jornada electoral. A pesar de todas las decisiones y acciones desarrolladas a tal efecto, tal y como constatan las numerosas denuncias de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, así como los gobiernos de diferentes países occidentales, los resultados parecen haber dado la victoria a la oposición.*

Por primera vez desde que el país logró su independencia en 1980 un partido opositor, el MDC, ha logrado arrebatarse el control del Parlamento al partido presidencialista. Zimbabwe, conocido durante el periodo colonial como Rodesia del Sur, fue colonia británica hasta 1965 cuando Ian Smith (presidente del país hasta 1980 que instauró un régimen de apartheid con las mismas bases que el sudafricano) autoproclamó su independencia, que sólo fue reconocida por Sudáfrica. Poco después surgieron los primeros grupos armados de oposición al régimen: el ZANU, liderado por Robert Mugabe y el ZAPU (Zimbabwe African People's Union) de Joshua Nkomo, que luchaban por los derechos de la población negra. Ante la imposibilidad de frenar a la insurgencia y la fuerte presión exterior el gobierno de Smith se vio obligado a negociar. En 1979 se firmaron los Acuerdos de la Casa de Lancaster en Londres, entre el gobierno de Rodesia, el británico, el ZANU y el ZAPU. Dentro de estos acuerdos se instituía una nueva constitución que garantizase los derechos de la población negra y se fija 1980 como fecha para las elecciones, después de las que el rebautizado como Zimbabwe sería reconocido como independiente por la comunidad internacional. Sin embargo, el tema de la redistribución de las tierras, una de las reivindicaciones clave de los grupos armados de liberación, tendrá que esperar. Según los acuerdos de Lancaster todos los firmantes se comprometían a respetar una moratoria de diez años para proceder a la reforma agraria. Así se evitaron las expropiaciones durante este periodo, permitiéndose la compra por acuerdo, para lo que se estableció un fondo de compensación con la finalidad de indemnizar a los granjeros blancos que aceptaran ceder una parte de sus tierras financiado por el Reino Unido y EEUU.

Mugabe arrasó en las primeras elecciones y fue nombrado presidente, mientras Nkomo alcanzó el puesto de Primer Ministro, pero poco después comenzaron las disensiones entre ambos líderes y sus seguidores, produciéndose un nuevo conflicto interno que enfrentaría al ZANU y el ZAPU de 1982 a 1987, y que concluiría con la fusión de ambos en el ZANU-PF. El nuevo gobierno, que durante el primer decenio se mostró a favor de la reconciliación nacional y la convivencia de negros y blancos dentro del país, llegada la crisis económica de los años 90 y la huelga general que paralizó el país en 1997 endureció su práctica de expropiaciones de tierras a granjeros blancos iniciada en 1991, como estrategia para retomar el apoyo popular. Desde 1988 los sucesivos gobiernos británicos se habían negado a pagar los fondos destinados a la compensación de los granjeros blancos acusando al Mugabe de ceder las tierras a los altos cargos de su gobierno y sus amistades, por lo que no existía ninguna forma de financiar las indemnizaciones. Esta política motivó la aprobación de sanciones por parte de EEUU, la UE, la suspensión y posterior salida del país de la Commonwealth y la participación dentro del FMI y el Banco Mundial por la falta de colaboración del régimen de Mugabe para solucionar sus problemas económicos y establecer una agenda de salida de la crisis. La cada vez más fuerte oposición política declaró fraudulentamente las últimas elecciones de 2002 y 2005, mientras aumentaban sus apoyos sociales.

El país actualmente se encuentra en una situación extremadamente vulnerable, con una inflación que supera el 100.000% y con un tercio de la población dependiente de la asistencia alimentaria para su subsistencia, según datos del Programa Mundial de Alimentos. El presidente Mugabe acusa a los países occidentales de asfixiar Zimbabwe con sanciones económicas (que pesan principalmente sobre miembros de su equipo y partido) y de financiar a organizaciones que se oponen a su gobierno. Si bien es cierto que estas medidas, junto con la exclusión del país de los mecanismos de toma de decisiones dentro del Banco Mundial y el FMI, han repercutido en el aislamiento internacional que sufre el régimen y en su declive económico, lo cierto es que la reforma agraria implementada por el gobierno ha logrado que el que un día fuera considerado el granero de África dependa actualmente de las importaciones para alimentar a su población. Ante este panorama muchos se preguntan sobre cómo recibirá

la población un nuevo fraude electoral y la imposibilidad de que se produzcan cambios en la dirección del país.

### **¿Los últimos coletazos del régimen de Mugabe?**

Sin embargo, la victoria lograda por la oposición en el Parlamento en las recientes elecciones no se ha alcanzado sin dificultad, ya que el número de escaños de la formación se encuentra dividido entre sus dos facciones, que no lograron ponerse de acuerdo para presentar una candidatura conjunta para las elecciones, lo que pone en cuestión su capacidad para tomar decisiones de forma consensuada desde este órgano legislativo. Además, esta victoria de la oposición en la cámara baja corre el riesgo de caer en saco roto ante la solicitud del ZANU-PF de que se realice un recuento de los votos emitidos en 23 de las 210 circunscripciones, lo que podría provocar un vuelco en los resultados de las elecciones legislativas, devolviendo a Mugabe el control parlamentario. Por otra parte, en un país fuertemente presidencialista no queda claro la capacidad estratégica que puede tener la oposición desde el Parlamento para actuar como contrapoder en el caso de que Mugabe fuera proclamado de nuevo presidente.

El gobierno y diversos medios afines ya han desvelado que será necesaria una segunda vuelta para poder proclamar al nuevo presidente. Ante la posibilidad de que se materialice esta hipótesis han aumentado los temores a que se produzca una grave ola de violencia contra los líderes opositores y sus partidarios. De hecho, el secretario general del MDC, Tendai Biti, declaró recientemente en Sudáfrica que Zimbabwe se encontraba en un "estado de guerra", que 3.000 familias se habían visto obligadas a desplazarse por la violencia, sobre todo en zonas rurales, que cientos de sus miembros habían sido detenidos, miles de personas torturadas y se habían producido 10 muertes hasta el momento. La ONG *Human Rights Watch* igualmente ha alertado sobre la existencia de centros de detención irregulares donde se están realizando torturas y retenciones extrajudiciales. Por si esto fuera poco, un carguero de bandera china intentó descargar a través de Sudáfrica un cargamento de armas destinado al gobierno de Zimbabwe. Un juez evitó que se produjera este desembarco en el país, mientras las autoridades chinas alegaban que no existe ningún embargo de armas contra Zimbabwe por parte de Naciones Unidas y que por lo tanto esta actitud de Sudáfrica se estaba convirtiendo en injerencia.

Otro factor alarmante, y que pone de manifiesto la voluntad por parte de Mugabe de mantenerse en el poder por todos los medios, son las informaciones filtradas a medios internacionales sobre el rearme y reagrupamiento de las milicias de veteranos de la guerra y jóvenes próximos al régimen y que ya han iniciado una campaña directa de amedrentamiento contra opositores y partidarios de la oposición. A esto se añade las declaraciones de los altos mandos militares y policiales sobre su voluntad de guardar absoluta fidelidad a Mugabe, mostrándose abiertamente en contra de que se produzca ningún cambio en el liderazgo del país.

Pero, ¿qué está haciendo la comunidad internacional ante la posibilidad de que esta situación de tensa espera en Zimbabwe desemboque en una nueva ola de violencia? y sobre todo, tal como señaló el exsecretario general de la ONU, Koffi Annan, ¿qué están haciendo los países vecinos africanos para evitar que la situación se desborde? La Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) se ha encargado en los últimos años de mediar entre el ZANU-PF y el MDC, de manera infructuosa a través del presidente sudafricano Thabo Mbeki, al que se ha criticado en numerosas ocasiones por su excesiva cercanía al régimen de Mugabe y su falta de mano dura a la hora de encauzar los desmanes del gobernante. Realmente cuesta entender qué razones se ocultan tras la falta de determinación sudafricana, a parte del respeto reverencial por aquellos que lucharon para liberar a Zimbabwe del régimen de apartheid, que tiene a Mugabe como su mayor exponente. Igualmente, teniendo en cuenta la manera en la que el estallido de un conflicto en el país puede afectar a la estabilidad de la región, no se explica la falta de determinación por parte de los líderes africanos para presentar propuestas para la salida de la crisis. Las sanciones económicas impuestas por la UE y Estados Unidos como estrategia de presión no pueden obviar que los que sufren finalmente el resultado de las mismas son la población civil, y que la falta de gestión de la impotencia y el sufrimiento puede tener un desenlace nada alentador. Sin pretender hacer comparaciones con los hechos que se desarrollaron en Kenya, existe la esperanza de que no sea necesario esperar a que se produzca un derramamiento de sangre para que todos los actores pongan todos los medios a su disposición en funcionamiento para reconducir esta grave crisis.